

VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL CARLA ASTRID HUMPHREY JORDAN RESPECTO DEL PUNTO DIEZ DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2022, REFERIDO AL ACUERDO INE/CG012/2022 CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN RELATIVAS A LA DEVOLUCIÓN Y RENUNCIA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, RECAÍDAS A LOS RECURSOS DE APELACIÓN IDENTIFICADOS CON NÚMERO DE EXPEDIENTES SUP-RAP-474/2021 Y SUP-RAP480/2021.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, numeral 6 del reglamento de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presento el siguiente voto PARTICULAR bajo las siguientes consideraciones:

VOTO PARTICULAR

El motivo de mi disenso con la mayoría de mis pares se encuentra en la forma en que se acatan las sentencias SUP-RAP-474/2021 y SUP-RAP480/2021 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En dichas determinaciones el órgano jurisdiccional establece como mandatos para el Consejo General del Instituto Nacional Electoral evaluar la solicitud de la recurrente (MORENA), en el sentido de la viabilidad de devolver los recursos que ya fueron ministrados por concepto de financiamiento público y, en su caso, los alcances que tal operación pudiera tener para efectos de fiscalización.

Voté en contra de dicho acuerdo porque consideré que no se acató en sus términos las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que entre otros aspectos determinó que, con independencia de que el INE no tenga injerencia en la forma en que los recursos que son devueltos a la Tesorería de la Federación son utilizados, deberá evaluar la solicitud de dicho partido político (recurrente), en el sentido de analizar la viabilidad de devolver los recursos que ya fueron ministrados por concepto de financiamiento público y, en su caso, los alcances que tal operación pudiera tener para efectos de la fiscalización de los recursos.

Al resolver el expediente SUP-RAP-474/2021, señaló lo siguiente:

“(…)

Al respecto, conviene precisar que en el acuerdo INE/CG86/2020, el CGINE consideró el tema de las renunciaciones al financiamiento público que pudieran presentarse con el

propósito de canalizar recursos para hacer frente a la epidemia derivada del COVID-19 que actualmente aqueja al país.

No obstante, la solicitud del recurrente se refiere no a una renuncia, que se considera previa a la entrega de la ministración, sino a una devolución, la cual operaría una vez transferidos los recursos, por lo que, al tratarse de una temática relacionada con la materia de fiscalización, en particular, con el análisis del destino que pudiera darse al financiamiento público, es que la competencia para pronunciarse al respecto corresponde al CGINE.

En este sentido, con independencia que el INE no tenga injerencia en la forma en que los recursos que son devueltos a la Tesorería de la Federación son utilizados, deberá evaluar la solicitud de la recurrente, en el sentido de la viabilidad de devolver los recursos que ya fueron ministrados por concepto de financiamiento público y, en su caso, los alcances que tal operación pudiera tener para efectos de fiscalización.

(...)

Énfasis añadido.

Por otra parte, la sentencia del expediente SUP-RAP-480/2021 determinó lo siguiente:

“Ello porque, como ha quedado expuesto, es una facultad directa y exclusiva del Consejo General conocer y resolver las consultas en comento por ser el encargado de vigilar las temáticas relacionadas con las prerrogativas de los partidos políticos, a efecto de que se cumpla con la normativa y, por ende, es quien debe determinar lo que en derecho corresponda en relación con la procedencia de la reducción de financiamiento público de los partidos políticos.

Lo anterior, tiene apoyo también en el hecho de que, de conformidad con los mismos criterios, en el cual el titular de la Dirección Ejecutiva sustentó su respuesta, se indica que esta última solamente debe verificar que las solicitudes cumplan con dichos criterios y, en caso contrario, requerir a los partidos políticos documentación que permita verificar el cumplimiento de los parámetros fijados para ello, sin que cuente con la facultad expresa para determinar la procedencia de la materia de fondo de las solicitudes de renuncia del financiamiento.”

En cambio, la mayoría del Consejo General determinó hacer un estudio para conocer y reiterar el tema relacionado la renuncia de las prerrogativas por parte de los partidos políticos y el estudio respectivo a la aplicación del Acuerdo INE/CG86/2022, dejando de observar que el mandato relativo de la Sala Superior estaba en analizar la viabilidad de que se realice una devolución del financiamiento que ya fue ministrado. En síntesis, se trata de dos acatamientos en el sentido de señalar que la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) no es el órgano competente para dar respuesta a un partido político que solicita hacer la devolución de su financiamiento y, de ahí el estudio de la viabilidad precisado anteriormente.

En mi criterio el punto principal de los acatamientos debe ser la contestación, vía Consejo General, de las peticiones del partido político en el sentido de estudiar la viabilidad de la devolución de su financiamiento, no así el estudio de la posibilidad de que pueda renunciar a él, cuestión distinta y que ya ha sido resuelta por este órgano colegiado.

Mi disenso se encuentra a partir del considerando cuarenta y cinco (45) del Acuerdo aprobado en el que se hace un estudio de los asuntos mediante el cual se divide el análisis de las consultas de la siguiente manera: “el análisis de las solicitudes en los siguientes tres apartados: A) Sobre la devolución del financiamiento público ya depositado; B) El procedimiento a seguir para atender las solicitudes de renuncia; y C) Sobre la solicitud de renunciar a la totalidad de la ministración del mes de diciembre de 2021”.

Sin embargo, dicho estudio carece de pronunciamientos sobre la viabilidad de la devolución. En él se abordan los fines y principios constitucionales de los partidos políticos y la necesidad de contar con financiamiento público para que cumplan con ellos. Asimismo, se fundamenta que el artículo 72 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el cual establece que el financiamiento debe ser aplicado para sufragar los gastos relacionados con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de las mujeres; el gasto de los procesos internos de selección de candidaturas; los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros similares.

No obstante, creo que no existe fundamento constitucional, ni legal para no permitir la devolución referida. Estoy consciente de que las prerrogativas son irrenunciables, sin embargo, el partido no dijo que renunciaba a ellas y, por el contrario, está realizando el cobro de estas y, en un acto posterior las está devolviendo. Bajo la máxima de un principio de derecho que sostiene que lo que no está prohibido está permitido, debemos entender que tampoco existe disposición expresa que prohíba la devolución de las referidas prerrogativas, mucho menos de cobrarlas y luego, devolverlas.

No desconozco que el proyecto tiene como uno de sus sustentos el artículo 26, numeral 1, inciso n) de la Ley General Partidos Políticos (LGPP) en el sentido de que los partidos políticos deban aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados. Para lo anterior, se necesitaría expresamente que el partido político haya aplicado dicho monto, lo que en especie no ocurre, puesto que se quiere devolver sin que se haya utilizado.

De igual forma se toma como punto para negar la solicitud la fiscalización de los recursos que se tiene que hacer una vez que le son entregados los recursos. Se detalla que una vez que se reciben las prerrogativas a las que tienen derecho, éstas pasan a formar parte del patrimonio de los institutos públicos y el ejercicio de dichos recursos queda sujeto a los procesos de fiscalización que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y la Ley Electoral prevén.

Ahora bien, estoy convencida de que, si bien el financiamiento público es parte del patrimonio público de los partidos políticos, también lo es que, conforme al artículo 96 del mismo Reglamento de Fiscalización los sujetos obligados, por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán sustentar con la documentación original, su contabilidad y se establece que los ingresos deben registrarse contablemente al momento de recibirse y en mi criterio esto seguirá ocurriendo. Es decir, no se opone a la fiscalización, ya que se tiene la obligación de cumplir con las multas y sanciones impuestas y los porcentajes a los que está obligado, como el 3% para el liderazgo de mujeres, entre otras, y, en este caso, tener la documentación soporte de la devolución del dinero que se haga. Esto deberá ser acreditado y demostrado para efectos de fiscalización.

Lo mismo, ocurre cuando se hace algún reintegro, se tiene la obligación de demostrar que así ocurrió. Esto es un punto muy importante. No se está ocultando el origen y destino de los recursos, tampoco se oculta la información y, en cambio, si se tiene certeza de lo que ocurrió con el dinero otorgado y transparencia de lo que paso con él.

La solicitud del recurrente se refiere no una renuncia, que se considera previa a la entrega de la ministración, sino a una devolución, la cual operaría una vez transferidos los recursos.

Además, se determina que una vez que el recurso ha sido transferido por el Instituto a las cuentas del partido político, éste pasa a formar parte de su patrimonio y, por ende, la aplicación y disposición del recurso -egresos- debe apegarse a las reglas establecidas en la normatividad en la materia, por lo que se reitera que solo puede ser utilizado para los fines para los que le fue entregado, tal y como se establece en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la LGPP.

Por otra parte, en el estudio de los siguientes apartados del Acuerdo se establece que no se están cumpliendo con los requisitos y procedimiento establecido en el Acuerdo INE/CG86/2020. Dicho acuerdo aplica para los supuestos de renuncia a su financiamiento público en virtud de la contingencia derivada de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y no para el caso en estudio que se refiere a la devolución del financiamiento público, puesto que es una situación diferente la devolución que la renuncia.

Desde mi punto de vista cualquier partido político debe tener un mecanismo establecido para que, en caso de que decida devolver el financiamiento público que reciba, sin que sea estar sujetos a mayores procedimientos o impedimentos.

En ese sentido, la devolución no debe ser vista como algo nuevo. Actualmente existe un supuesto en el que se hace una devolución del financiamiento público, el cual ocurre cuando un partido político nacional no agota (gasta) todo el financiamiento público que se le otorga, por lo que los recursos no erogados deben devolverse. Lo cual se tiene que declarar para todos los efectos legales a que haya lugar.

El derecho a la devolución del financiamiento público es algo que se debe de garantizar y no establecer la negativa con base en un procedimiento establecido para su renuncia, en donde simplemente no se entregan las ministraciones correspondientes y se devuelven a la Tesorería. En ese sentido, se debe garantizar el derecho a devolver el financiamiento público en cualquier momento.

La Tesis XXI/2018 de la Sala Superior del TEPJF establece que, aun cuando no exista alguna norma que lo ordene expresamente, de conformidad con los principios constitucionales, hacendarios y presupuestales de racionalidad, austeridad y anualidad que deben prevalecer en las finanzas del país, los partidos políticos tienen el deber de reintegrar al erario los recursos entregados para el desarrollo de actividades ordinarias y específicas que no fueron debidamente comprobados o devengados en cada ejercicio anual.

Además, se debe considerar que con la devolución no se deja de cumplir con los compromisos y obligaciones de los institutos políticos como lo son los porcentajes que correspondan tanto para actividades específicas como para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, y que hayan sido determinados por este Consejo General, en virtud de las disposiciones constitucionales y legales, tomando como base el financiamiento a que tienen derecho y no el que van a recibir producto de la renuncia de mérito, pues interpretarlo de forma distinta conllevaría a un incumplimiento de los fines y obligaciones que los partidos políticos tienen definidos constitucionalmente, en términos del artículo 41, Base I, en relación con la diversa Base II, inciso c), de la CPEUM.

Por último, me parece importante señalar con toda claridad dejar que una vez devueltos o reintegrados los recursos a las autoridades hacendarias ni el INE ni los partidos políticos tienen ninguna injerencia en el destino que les de la Tesorería de la Federación, ni existe mandato alguno que obligue a las autoridades hacendarias a darle un fin determinado a los recursos públicos.

CARLA ASTRID HUMPHREY JORDAN
CONSEJERA ELECTORAL

